

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 20° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-9460-2023
CARATULADO : VERA/FISCO DE CHILE-CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO DE CHILE

Santiago, cinco de Marzo de dos mil veinticuatro

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE

Al folio 1, comparece don Nelson Guillermo Caucoto Pereira, abogado, domiciliado en pasaje Doctor Sótero del Río N°326, oficina 1104, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, en representación de don Héctor Alfonso Vera Vera, pensionado, domiciliado pasaje Exequiel Fontecilla N° 2.715, Villa San Carlos, comuna de Peñalolén, Santiago, Región Metropolitana; quien interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios, en juicio ordinario de hacienda, en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Sergio Letelier Wartenberg, abogado, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1.225, piso 4, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana.

Al folio 7, consta la notificación al demandado.

Al folio 8, el demandado contestó la demanda.

Al folio 12, se evacuó la réplica.

Al folio 14, se evacuó la réplica.

Al folio 18, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que rolan en autos, notificándose a las partes con fecha 13 de noviembre de 2023.

Al folio 28, se acogió reposición contra la resolución que recibe la causa a prueba.

Al folio 61 y 69, se rindió prueba testimonial.



CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el abogado demandante señala, que don Héctor Alfonso Vera Vera nació el 27 de enero de 1944. Indica, que es hijo de don Lautaro Luis Vera Andrade y de doña Ida Norma Vera Vera.

Afirma, que su representado ha sido reconocido por el Estado de Chile como víctima de prisión política y tortura, por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocida como “Comisión Valech I”, figurando bajo el numeral 26.044 del listado o nómina de víctimas reconocidas por dicha comisión de verdad.

Menciona, que don Héctor Alfonso Vera Vera ha relatado los hechos que configuran su experiencia represiva, manifestando lo siguiente:

“A modo de introducción, debo señalar que soy periodista titulado de la Universidad de Concepción. Gané un concurso nacional de profesor de jornada completa en 1970, de la Universidad del Norte de Antofagasta. Me dediqué a reorganizar el plan de estudios del Departamento de Comunicación Social, unidad que, como varias otras, estaba en crisis de orientación académica e institucional. Una huelga prolongada de estudiantes había cuestionado la calidad de la formación de periodistas y exigían cambios importantes para proseguir sus estudios.

En 1972, fui elegido Vicerrector de la Sede, en votación democrática de la comunidad universitaria, compuesta por académicos, estudiantes y funcionarios. Realicé solo un poco más de un año de gestión de un total de cinco años. Esto, porque fui sacado de mis funciones debido a que agentes del Estado me detuvieron 24 horas después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Diversos e importantes proyectos de investigación y docencia ligados al desarrollo regional se iniciaron en ese momento y hoy forman parte de la historia de la Universidad del Norte.

A continuación, expondré 6 aspectos que constituyan y configuran la criminal represión que sufrí:

I.- Detención y secuestro en Cerro Moreno de Antofagasta:



Foja: 1

Al momento de mi detención tenía una familia compuesta por mi cónyuge, cuyo nombre es Olga Cecilia Rivas Otárola, y mi hijo, llamado Héctor Luis Vera Rivas, de dos años de edad. Mi cónyuge estaba embarazada de cinco meses. El 12 de febrero de 1974, nace nuestro segundo hijo, Alfonso Joaquín Vera Rivas, mientras yo estaba en la Cárcel de Antofagasta, sin fundamentación de cargos. Nuestro tercer descendiente, nuestra hija Claudia Cecilia Vera Rivas, nació en Bruselas, Bélgica, el 3 de diciembre de 1982, durante el exilio.

La detención violenta fue realizada en nuestro domicilio familiar, en Antofagasta, el 12 de septiembre de 1973, a las 23:30 horas, y sus ejecutores fueron militares armados con metralletas, acompañados de varios vehículos militares. Fui conducido a la Intendencia de Antofagasta y mantenido allí hasta el día siguiente, a las 10 horas, sin que se me indicaran los motivos de tal detención. Desde allí, fui conducido en un vehículo militar a un lugar desconocido. Al final, se trataba de los subterráneos de la base aérea de Cerro Moreno. En el vehículo fui permanente amenazado por un oficial de la Fuerza Aérea de Chile, FACH, que me apuntaba con un revolver en la cabeza durante todo el trayecto, desde el centro de Antofagasta hasta el Aeropuerto.

En Cerro Moreno fui hecho prisionero, junto a otros dirigentes políticos de la Unidad Popular, como por ejemplo, don Mario Silva Iriarte, don Juan Ruz Ruz, don Carlos Bau Aedo y don Eugenio Ruiz Tagle Orrego. Fui torturado con prolongados interrogatorios y experimenté dos simulacros de fusilamiento.

Esta detención en los subterráneos de la Base Aérea de Cerro Moreno de la FACH, en Antofagasta, fue absolutamente ilegal, sin orden judicial y sin cargos conocidos. Esta detención fue, en rigor, un real secuestro que duró 20 días, sin que mi familia supiera de mi paradero o destino.

Pasado estos 20 días de secuestro, mi familia no sabía nada de la existencia ni del lugar de mi detención, porque había una operación secreta, supuestamente instruida por el General de la Primera División del Ejército, Joaquín Lagos Osorio.

Esta detención-desaparición, produjo un daño psicológico y social de gran impacto en mi familia inmediata como en toda mi red familiar: mamá, hermano, hermana, suegros, amigos, primos, tíos. Por su parte, la comunidad universitaria quedaba a merced de las arbitrariedades de las autoridades designadas, sin competencias para ejercer sus derechos y sin saber cuál sería el destino de cada uno de ellos.



Foja: 1

Posteriormente, se supo que mi detención fue hecha por personal de inteligencia del Ejército y de la Fuerza Aérea.

Con mi detención y privación de libertad por parte de agentes del Estado, quienes obedecían a la Junta Militar que usurpó el poder el 11 de septiembre de 1973, perdí mi cargo de autoridad elegida, perdí mis funciones de académico y se me privó de mi único sustento salarial. Perdí, igualmente, las cotizaciones correspondientes al pago de dos años en la Cooperativa de Vivienda Universitaria, con la consecuencia de quedar fuera de la propiedad a la que postulaba. Mi vida en Chile, mis derechos elementales y políticos, y mis proyecciones, tanto personales como profesionales, me fueron absolutamente clausurados y despojados por la acción de los agentes del Estado de Chile, ligados al golpe militar de 1973.

II.- Prisionero político en la Cárcel Pública de Antofagasta, paso de la Caravana de la Muerte y Consejo de Guerra

Luego de esta detención-secuestro, fui trasladado, con otros siete “presos políticos”, en un camión de la FACH, a la Cárcel Pública de Antofagasta, que quedaba en calle Arturo Prat N° 1109-1147, en el centro de la ciudad.

Estando en la Cárcel de Antofagasta, fui sometido a un régimen de aislamiento en una celda en solitario, situación que duró dos meses. Aún no era informado ni de las acusaciones ni del procedimiento jurídico que se utilizaría en mi contra. Este castigo de aislamiento total, hecho sin explicación de nadie, es, sin duda alguna, un tormento totalmente injustificado y arbitrario llevado a cabo por los agentes del Estado.

Más tarde y privado de mi libertad, fui sometido a un CONSEJO DE GUERRA, con participación del Auditor Militar General Marcos Herrera Aracena, de un Fiscal Militar de apellido Castillo y de un Consejo compuesto por oficiales de la Fuerza Aérea, Ejército y Carabineros.

Este juicio tuvo lugar con posterioridad a los crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte, encabezada por el general Sergio Arellano Stark, en su paso por Antofagasta, comitiva que asesinó a dos de los prisioneros que estuvieron presos juntos conmigo, en la Base de Cerro Moreno. Se trata de Mario Silva Iriarte y de Eugenio Ruiz Tagle Orrego. Como prisionero y compañero de cárcel de los asesinados por la Caravana de la Muerte, no supe de esto hasta varios días después, en la visita de familiares a la Cárcel de Antofagasta.



Foja: 1

Estos asesinatos fueron cometidos a espaldas del General Lagos. Los que fueron asesinados, estaban en la cárcel cumpliendo penas impuestas por sentencias condenatorias dictadas por tribunales militares en tiempo de guerra. Fueron ilegalmente sacados de la custodia de Gendarmería. Esta operación fue ejecutada bajo la instrucción directa del general Augusto Pinochet Ugarte. Mi cónyuge, Olga Cecilia Rivas Otárola, fue testigo de su presencia en la casa del General Joaquín Lagos el mismo día que se consumó la masacre de los presos políticos en Antofagasta. Estas declaraciones fueron entregadas al secretario del Juez Juan Guzmán, con ocasión del caso Gabrielli, que se especificará más adelante.

En Antofagasta, los familiares de las víctimas lograron tener los cuerpos de los fusilados y darles sepultura con muchas restricciones. Mi cónyuge recorrió diversos lugares, junto a otras mujeres de presos políticos, sin saber de mi y sin saber quiénes eran los asesinados de la Caravana de la Muerte. Finalmente, ella pudo ver los cuerpos horriblemente mutilados de los asesinados en la morgue del Hospital Regional, donde no estaba yo. Sólo un día después, ella supo que yo seguía en la cárcel, gracias a la información de un gendarme agradecido, cuya profesora en la escuela primaria fue mi madre.

El Consejo de Guerra que se me hizo, fue en un local improvisado de la Cárcel de Antofagasta, en noviembre de 1973. Dicho juicio fue una mascarada o una simulación de justicia. No habían cargos concretos que se me formularan, fuera de ser acusado de defender el gobierno de Salvador Allende. Tuve derecho a un abogado defensor, que lo hizo de manera gratuita. Se trata del abogado Sr. Bernardo Julio, hoy fallecido.

En el Consejo de Guerra se afirmó que yo quería desestabilizar la Junta de Gobierno, sin presentar ninguna prueba al respecto y teniendo sólo 24 horas para hacer las acciones imputadas. El Presidente Allende había visitado dos veces la Universidad del Norte y en ambas ocasiones me correspondió recibirlo. Parece que este antecedente era suficiente para que las autoridades militares pensarán que yo era un enemigo de la Junta Militar.

Al abogado defensor, don Bernardo Julio, no se le permitió hablar en el Consejo de Guerra. El abogado intentó presentar sus argumentos y pruebas, y con gritos de uno de sus miembros, el mayor Patricio Ferrer, del Servicio de Inteligencia del Ejército, le ordenó callar con duros epítetos. Durante largos minutos se le humilló delante de un silencioso consejo. En la audiencia, se prohibió leer la lista de una docena de académicos que declaraban a favor mío. Se ocultó en el juicio que existía un acta que firmé con el oficial militar que allanó el campus de la



Foja: 1

Universidad del Norte el día 11 de septiembre de 1973, donde se establecía que no se habían encontrado armas en dicho recinto. No tuve derecho a pronunciar palabra alguna durante la audiencia. Sólo se escuchaban los insultos de Ferrer.

Dicho Consejo de Guerra dictó sentencia condenatoria en mi contra, imponiéndome una sanción de 20 años de prisión, hecha con un tono destemplado del que parecía era el Presidente del Consejo de Guerra.

Mi defensor apeló en contra de esta sentencia del Consejo de Guerra ante el Comandante en Jefe de la Primera División. Esta autoridad modificó la resolución que me imponía una sanción de 20 años de prisión, por la de 10 años de extrañamiento que debería cumplirse fuera de América Latina. Cumplí siete meses en prisión en la Cárcel de Antofagasta. Fui conducido encadenado y escoltado por dos detectives, llevado a avión a Santiago, para viajar al extranjero. Los pasajes y los gastos de los detectives tuve que pagarlos yo.

III.- Cumplimiento de la pena de exilio en Bélgica:

El 14 de marzo de 1974, viajé a Bélgica, para cumplir con los 10 años de exilio. Subí al avión encadenado. Me fui solo, sin mi familia, dado que mi compañera tenía un bebé de solo 1 mes de vida. Finalmente, ella llegó a Bélgica con sus dos hijos en el mes de julio de 1974.

Durante varios meses fui vigilado en Bélgica por agentes enviados por la DINA o por autoridades del gobierno de Chile. Luego, cuando estos agentes fueron interrogados por la policía local, confesaron su tarea de informantes. El gobierno de Chile procedió, enseguida, a contratar a dos ciudadanos belgas para hacer un seguimiento de mis desplazamientos y contactos. De nuevo, la policía belga intervino para que finalizaran estas acciones.

Esta situación de espionaje se supo por medio del alcalde (Maire) de Lessines, Fernand Delmotte, quien se ocupó de mi seguridad, dada mi condición de refugiado de Naciones Unidas. Los alcaldes de Bélgica tienen tuición sobre los policías.

Este asedio de los agentes del Estado de Chile en Bélgica y en muchos otros países, es una acción que dañó el presupuesto nacional y generó mucho daño moral a las personas que éramos vigiladas y amenazadas. Algunos perdieron la vida, como el general don Carlos Prats y el excanciller don Orlando Letelier.

IV.- Obtención de la calidad de Refugiado de Naciones Unidas en Bélgica:



Foja: 1

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, con sede en Bruselas, me confirió el estatuto de refugiado político en el mes de septiembre de 1974. Contrariamente a lo que se cree comúnmente, en cuanto a que la protección de Naciones Unidas es un buen estatuto. En la práctica, es una situación frágil y precaria.

Cada vez que viajaba de Bélgica a Francia, país vecino, por razones laborales, debía sacar un permiso especial en la embajada de Francia en Bélgica. No pude entrar en auto a Yugoslavia con el pasaporte de Naciones Unidas, porque necesitaba un permiso especial dado fuera del país de destino.

Una vez que asistí a Malta, a una reunión de UNESCO como experto en educación en derechos humanos, me retuvieron en el aeropuerto el pasaporte de Naciones Unidas y, durante los días de permanencia en la isla de Malta, fui vigilado por personal vestido de civil. Solo recuperé mi pasaporte en el mismo momento del vuelo de regreso a Bruselas.

En el aeropuerto de ciudad de México, fui retenido durante 5 horas por tener pasaporte de Naciones Unidas. La visita era por razones profesionales dirigidas a organizar una conferencia internacional. Intervino a mi favor el embajador de México en Bruselas, el Sr. González, quien había sido embajador anteriormente en Chile, en tiempo del ex Presidente de la República don Salvador Allende Gossens, lo que no impidió que un funcionario mexicano pusiera en el pasaporte de Naciones Unidas la palabra: apátrida.

V.- Incumplimiento del Estado de Chile de sentencia:

Cuando se cumplieron los 10 años de mi exilio en Bélgica, se consultó por medio de una organización de defensa de los derechos humanos de Chile, la Vicaría de la Solidaridad, si podría regresar al país. El abogado don Humberto Lagos Schuffeneger hizo la averiguación y determinó que era prudente no volver al país. Existía un alto riesgo que sería tomado prisionero si regresaba al país, porque no había garantía que lo resuelto por el general Joaquín Lagos, de 10 años de extrañamiento, sea respetado por las autoridades militares y judiciales de la época. En la práctica, me estuvo permitido entrar a Chile sólo cuando cumplí 16 años de exilio. La propia justicia militar no era respetada por el gobierno militar.

Es conocido el entredicho entre el general Lagos y el general Pinochet, por el tema de los ejecutados en la Caravana de la Muerte en Antofagasta y Calama, que se saldó con la salida del general Joaquín Lagos de la comandancia de la



Foja: 1

Primera División del Ejército. En febrero de 1974, el general que reemplazó al general Lagos había manifestado que quería reabrir el juicio en mi contra y romper la resolución de enviarme al exilio, deseo que no pudo concretar dado que la sentencia era inimpugnable.

Durante los 5 primeros años de exilio en Bélgica, trabajé como obrero en Lessines y en Bruselas, para solventar los gastos del grupo familiar.

Más tarde, obtuve una beca de la Universidad Católica de Lovaina, la que me permitió, sin abandonar mis trabajos, hacer un doctorado en Comunicación Social, grado que obtuve el año 1985. Esto me permitió encontrar nuevos empleos relacionados con mis competencias como periodista y educador.

Los agentes del Estado de Chile dejaron sus huellas en los asesinatos, en el extranjero, de personalidades ligadas al gobierno del Presidente Salvador Allende, generando inseguridad y angustia a sus ciudadanos.

Yo, como encargado del Partido Socialista en Bélgica, estuve asociado al peligro de la acción de estos agentes del Estado. Un periodista norteamericano que entrevistó a Michael Townley le reveló que estuvo en el aeropuerto de Zaventem, en Bruselas, dispuesto a asesinar a Carlos Altamirano y su comitiva en un baño y se arrepintió a última hora. Ese día de 1976 en que se iba a concretar tal atentado, yo estaba acompañando al Sr. Altamirano en ese lugar. Este episodio ilustra sobre la amenaza permanente a la vida de la que fuimos víctimas de los agentes del Estado de Chile, aún las personas que vivíamos fuera del territorio de Chile.

VI.- Fin del exilio y regreso a Chile: privación de derechos políticos y severas secuelas por defender los derechos humanos.

En el año 1987, mi nombre apareció en la última lista de las personas en exilio autorizadas a volver al país, situación ligada a la venida del Papa Juan Pablo II a Chile.

Finalmente, en el año 1989, mi familia, integrada en ese entonces por mi cónyuge, mis 3 hijos y yo, regresamos a Chile.

Una vez llegados a Chile, fui privado de mi derecho a votar en las elecciones primarias entre Eduardo Frei y Ricardo Lagos, llevada a cabo el 23 de mayo de 1993, por ser eliminado del listado de votantes y tener pena aflictiva aplicada por el Consejo de Guerra, en su sentencia del año 1973. Incluso, se me prohibió votar



Foja: 1

en las elecciones internas del Partido Socialista. Una secretaria de la mesa, para justificar la prohibición de votar respondió: “dado que Ud. ha sido eliminado del registro electoral, no puede votar acá tampoco”.

Dicha medida procedía de las secuelas de la sentencia del Consejo de Guerra tenido en Antofagasta. Se tuvo que tramitar y publicar una ley especial para restituir la plena ciudadanía a los presos políticos afectados por penas aflictivas durante la dictadura, la cual, por cierto, me incluía. El castigo de la dictadura aplicado en 1973 seguía vigente hasta 1999, en materia de violar los derechos ciudadanos. Es decir, la pena de extrañamiento tendría una duración de 26 años, en circunstancia que la sentencia del Consejo de Guerra era de 10 años.

El año 1999 y 2000, Juan Ruz, ahora fallecido, con Carlos Bau también fallecido, y el suscrito, presentamos una denuncia pública sobre las responsabilidades del General del Aire Hernán Gabrielli Rojas en las torturas sufridas por don Eugenio Ruiz Tagle Orrego y la participación de Gabrielli en actos de represión en Antofagasta, en los meses que siguen el golpe civil militar. El general Gabrielli, que era teniente en Antofagasta al momento del golpe, fue un activo agente represor que se ufanaba de sus acciones contra los presos políticos. En 1999, estaba nominado para ser el nuevo Comandante en Jefe de Aviación.

El general comenzó por negar incluso su presencia en Antofagasta, la que está claramente documentada. Luego, invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado usando su investidura de general y acusó a los denunciantes por intermedio del conocido abogado Balmaceda, llevándolos a los tribunales de justicia y pidiendo penas de cárcel para los tres denunciantes. Era el primer juicio de derechos humanos después de la llamada “mesa de diálogo” entre civiles y militares, donde el tema central era el rol y la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el caso de los detenidos-desaparecidos.

El Juez Juan Guzmán tomó la causa y, finalmente, después de pasar por el careo con el general Gabrielli en dependencias del edificio de la Defensa Nacional, y luego, bajo la tuición del fiscal Carroza, se dictó el sobreseimiento de los cargos y, expresamente, no se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado, dada “la veracidad de los testimonios de los denunciantes” (Juez Ballesteros). De esta manera, el general Gabrielli no pudo ocupar el cargo de Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Este juicio nos tensionó profundamente a los tres denunciantes, por rememorar episodios que la mente desea olvidar; y vivimos un alto grado de incertidumbre,



Foja: 1

por encontrarnos bajo la mira de una justicia que no terminaba en Chile de tomar un camino claro en materia de derechos humanos. Lo propio sucedía con diversas autoridades políticas, en el gobierno del Presidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar.

Este juicio judicial, ampliamente difundido por los medios de difusión en Chile, esta denuncia de violación de los derechos humanos de un agente del Estado, me costó el precio de ser despedido, a pesar de tener las mejores evaluaciones de los estudiantes y de las propias autoridades, del cargo de profesor de media jornada en la Universidad Santo Tomás de Santiago. El peso de ser etiquetado como un militante de izquierda dispuesto a denunciar los abusos de la dictadura, fue motivo suficiente para volver a ser discriminado en mi vida profesional, sin que hubiese relación con sus competencias y desempeño académico. Los propietarios de la Universidad Santo Tomás no querían que su institución estuviera ligada con personas o con conflictos de derechos humanos.

Este despido laboral es otra secuela de la persecución política de la dictadura militar, que de diversas formas, prolonga su funesta herencia aún en un estado de derecho y en una democracia, y que en el presente sigue deteriorando severamente la buena convivencia nacional. Solo téngase presente que la Constitución de Pinochet, con toda una serie de reformas, sigue actualmente vigente. Ello permite dimensionar el difícil camino para restituir en pleno el estado de derecho en Chile y superar las heridas del pasado dictatorial”.

Argumenta, que los hechos relatados son constitutivos de un crimen de lesa humanidad.

Expresa, que el Estado de Chile, ha suscrito y reconocido declaraciones y convenciones a nivel internacional, y adherido a múltiples resoluciones emitidas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, además ha otorgado vigencia a determinadas normas que se fundan en la costumbre internacional y los Principios Generales del Derecho, es por esto, que ha ido adquiriendo una serie de obligaciones internacionales, que tienen como marco la obligación general de “respeto de los derechos esenciales del hombre” por parte de los Estados, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

Indica, que el desarrollo de este complejo normativo conocido como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha significado un cambio en la



Foja: 1

responsabilidad estatal. En materia de derechos humanos, los Estados tienen una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

De allí, la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente (Cfr. Aguiar, Asdrúbal. La responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Vol. 17, IIDH, 1993. Pág. 25).

Se trata, en consecuencia, de una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado. La responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringe los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto.

En cuanto a la Responsabilidad del Estado, en base a normativa interna, indica que el artículo 38, inciso 2, de la Constitución Política de la República establece que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado, podrá reclamar ante los tribunales de justicia. Este precepto consagra una acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad, provoquen un daño a una persona.

Menciona que la Excelentísima Corte Suprema, ha sentenciado que: *“la responsabilidad del Estado por actos de la administración [...] emana de la naturaleza misma de esa actividad estatal, en cuanto organización jurídica y política de la comunidad y de las variadas acciones que debe desarrollar en el ámbito de las funciones que les corresponde llevar a cabo para el cumplimiento de los fines y deberes reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Política, para lo cual debe hacer uso de todas las potestades y medios jurídicos y materiales que ella le otorga, lo que hace que las distintas responsabilidades que puedan causar esas acciones, se sometan a normas y principios de la rama del derecho público”*. (Cfr. E. Corte Suprema, 26.01.5, “Bustos Riquelme con Fisco de Chile”, Rol N° 3.354-03, Considerando N° 11.)



Foja: 1

Sostiene, que la naturaleza de la responsabilidad extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango constitucional, supraconstitucional y también legal, y todas ellas normas propias del derecho público.

Expresa, que en el Capítulo I de nuestra Carta Fundamental, artículo 1° inciso 4° se consagra que *“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común”*, dicha norma relacionada con el artículo 5 inciso 2° del mismo cuerpo legal reafirma nuestra conclusión al señalar: *“El ejercicio de la Soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”*. Expresa, que dichas normas, en conjunto con los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República de 1980, plasman los principios de la Primacía Constitucional y la Juridicidad, conforman el denominado *“Estatuto de Responsabilidad Extracontractual del Estado”*.

Argumenta, que la correcta resolución del caso sub lite requiere la aplicación armónica de la Constitución Política, de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y de la Ley de Bases de la Administración del Estado. A contrario sensu, asegura, que en este conflicto son improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto, como es fácil comprender, se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses.

Sostiene, que la diferencia entre uno y otro sistema de responsabilidad es evidente.

Hace presente que la ltima. Corte de Apelaciones de Santiago, ha fallado que *“(...) tratándose de una violación de los derechos humanos el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos, y ello ha de ser necesariamente así porque este fenómeno de transgresiones tan graves, es muy posterior al proceso de codificación que no lo considera por responder a criterios claramente ligados al interés privado, y por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX”*. (Cfr. I. Corte de Apelaciones de Santiago, Caso “Carrasco con Fisco de Chile”, 10.07.2007, Rol N° 6715-2002).



Foja: 1

Expone, un conjunto de razones de texto que permiten sostener porqué el derecho de daños del Código Civil chileno es insuficiente para resolver conflictos que versan sobre violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana. Tales razones son las siguientes:

1.- Este caso no se trata de la búsqueda de una reparación para un delito común. Comenta que el Título XXXV del Libro IV del Código Civil, no es la norma que tiene que juzgar aquellos actos en donde los hechos que se ventilan dicen relación directa con una práctica sistemática y masiva por parte del Estado, destinada a exterminar a un número importante de la población nacional sólo en razón de sus creencias e ideologías políticas. Por lo tanto, para no desnaturalizar el tenor literal del artículo 2314 del Código Civil uno tendrá que reconocer que dicha norma fue diseñada para resolver ilícitos comunes y, por lo mismo, ante un caso como éste el derecho aplicable debe hallarse más bien en el ámbito constitucional, administrativo e internacional.

2.- Las normas del Título XXXV del Libro IV del Código de Bello, fueron dictadas en un contexto en donde los mayores riesgos, peligros y daños parecían venir del comportamiento de personas ebrias (Art.2318); de adolescentes con mala educación y hábitos viciosos (Art.2321); edificios en ruinas (Art.2323); o bien, de animales sueltos, extraviados y fieros (Art.2326 y Art. 2327). Sostiene, que la regla del artículo 2322 -sobre la relación entre amos y criados- es del todo insuficiente a la hora de resolver la dinámica que se produce al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Reconoce, que aunque existe una norma que parece más pertinente a este asunto concreto –el caso de quien dispara armas de fuego de manera imprudente (artículo 2329, N°1)- con todo, dicha regla también es inadecuada para resolver casos de violaciones intencionales, masivas y sistemáticas a los derechos esenciales de un sector no menor de habitantes del Estado.

Respecto a la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, afirma, que la acción destinada a obtener indemnización de perjuicios derivados de la comisión de delitos de lesa humanidad es imprescriptible, al igual que la acción penal.

En cuanto a la imprescriptibilidad de la acción civil por hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad, sostiene, que existe un avance jurisprudencial en el ámbito nacional e internacional. Advierte, que si bien no existe norma expresa que lo señale en el ordenamiento jurídico, debemos reconducirnos al artículo 5, inciso 2°, de la Constitución Política de la República de 1980, que es la norma



Foja: 1

constitucional de apertura hacia el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este sentido, podemos aplicar normativa internacional y jurisprudencia relativa a la imprescriptibilidad de la acción penal y civil.

Añade, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala con claridad la existencia del deber de reparar que se le impone a todo Estado que haya sido responsable de violar alguno de los derechos fundamentales de la persona humana, que se encuentren reconocidos y garantizados por dicha Convención.

Comenta, que si bien, por un lado, es efectivo que en ninguna disposición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se señala de modo expreso la imprescriptibilidad de las acciones civiles, la ausencia de regulación jurídica expresa le impone al juez la tarea de interpretar, o más bien, integrar la normativa existente con los correspondientes principios generales del derecho que, en el caso concreto, orientan al derecho administrativo y en especial al derecho internacional de los derechos humanos.

Comenta, que en Chile –dada su calidad de Estado miembro del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos–, la lógica que debiera operar en casos de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos de alguna persona, tendría que ser la misma, esto es, reparar íntegramente el mal causado.

Se refiere, a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad, instrumento no ratificado por Chile, pero cuya obligatoriedad se encuentra reconocida por nuestros tribunales de justicia, como emanación de una norma de ius cogens. (Cfr. E. Corte Suprema 13.12.2006, “Caso Molco”, Rol N° 559-2004. Considerando N° 19). En fin, vale reparar en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado por el Decreto Supremo N° 144 publicado el 1° de Agosto de 2009, que en su Art. 75 (sobre reparaciones a las víctimas), establece que: “[...] *La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación*”.

En este mismo orden de ideas, expone que nuestro país ha concurrido bajo el amparo del tratado marco de la Carta de las Naciones Unidas de 1948, conforme a la información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, obligándose por tratados internacionales de ejecución, los cuales ha suscrito en la modalidad de



Foja: 1

declaraciones y resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre las cuales vale destacar la resolución A/RES/60/147, de 24 de octubre de 2005, los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, que en su Principio II delimita el objeto de la obligación del Estado en materia de vulneración de derechos fundamentales al establecer: “[...] *La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de:*

a) Adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones;

b) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional;

c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación; y,

d) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se describe más adelante.”

Indica, que la idea de reparación se trata de una obligación compleja e indisoluble constituida por el deber de investigar los hechos, la obligación de sancionar a los responsables y la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas. Esta última obligación tiene que ser tratada como un deber imprescriptible en virtud del Principio IV de dicho cuerpo legal según el cual: “[...] *Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional.*”

Señala que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en su 61° Periodo de Sesiones, aprobó el año 2005 el “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. Allí se lee -en el Principio 23 sobre



Foja: 1

restricciones a la prescripción- que: *“La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación.”*

Resume, que el fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales mediante ilícitos que la conciencia jurídica universal considera intolerables, se rige por normas y principios del Derecho Público y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, logrando sujetar, dentro de sus esferas, por vía de la progresividad normativa, un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente, desde los primeros acuerdos interestatales.

Afirma, que así lo han entendido los Tribunales Superiores nacionales y es en ese sentido que la más reciente jurisprudencia de la E. Corte Suprema le ha otorgado el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de lesa humanidad atentatorios contra los derechos humanos declarando que: *“[...] conforme se ha señalado en el presente veredicto, en autos se está en presencia de lo que la conciencia jurídica denomina delitos de “lesa humanidad”, calificación que no sólo trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el ilícito, declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que además, la inviabilidad de proclamar la extinción - por el transcurso del tiempo - de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado.”* (Cfr. E. Corte Suprema 21.01.2009, “Episodio Tormen”, Rol N° 3907-2007, Considerando N° 30).

Comenta, que en este caso existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima cometida en contra de la persona de la víctima, que como detenida política y torturada le ha tocado soportar. La dolorosa situación a la que se ha visto enfrentado, al igual que el resto de su familia, configura un claro daño moral que, según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado.

Expone que por daño moral, se entiende aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, esto es un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en



Foja: 1

sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico.

Añade, que el daño moral se hace patente por sí mismo, en atención a los hechos, es decir, salta a la vista lo evidente que es. Las angustias, padecimientos y dolores, sumadas a las incertidumbres, miedos, pérdidas de proyectos de vida, inseguridades, son fáciles de entender en su plenitud, y sólo cabe al sentenciador hacer una estimación fundada de su magnitud para determinar el monto de la reparación pecuniaria.

Por todo lo anteriormente expuesto, demanda al Fisco de Chile el pago de \$200.000.000, para la víctima don Héctor Alfonso Vera Vera, por concepto del daño moral sufrido producto del accionar ilícito de agentes estatales en su contra, suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda, hasta su completo pago, más las costas del juicio; o, lo que el Tribunal estime prudencialmente en Justicia.

Previa invocación de doctrina, jurisprudencia y disposiciones legales que estima pertinentes, solicita tener por interpuesta demanda civil de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, pidiendo el pago total de \$200.000.000, para don Héctor Alfonso Vera Vera, por el daño causado por agentes del Estado; o la suma que el Tribunal determine prudencialmente y en justicia, con reajustes de acuerdo con el IPC, más intereses legales, ambos desde la fecha de notificación de esta demanda o desde cuando el Tribunal estime; acogerla a tramitación y, en definitiva, condenar al demandado a pagar al demandante civil la suma señalada, o la que el Tribunal prudencialmente determine, más las costas del juicio.

SEGUNDO: Que, en su contestación, respecto de las excepciones, defensas y alegaciones que se contraponen a la demanda, opone en primer lugar, la Excepción de Reparación Integral, por haber sido ya indemnizado el demandante.

Indica, que no resulta posible comprender el régimen jurídico de las reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos, si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior- y desde- lo que ya es común considerar; el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”.

Expresa, que el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional.



Foja: 1

Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Destaca, que no debe olvidarse que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Indica, que el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación. Estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de la Ley 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Prosigue relatando que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno de Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron “(a) *el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse*”.

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso



Foja: 1

una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, *“reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”*.

Por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación cabe indicar que el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la Comisión, entendió por reparación *“un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe”*. A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en *“un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y al consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”*. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Relata, que en la discusión de la ley 19.123, el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación “moral y patrimonial” buscada por el proyecto. La noción de reparación “por el dolor” de las vidas perdidas se encontraba también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal “de indemnización” y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la “responsabilidad extracontractual” del Estado. Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18.

Expresa, que asumida esta idea reparatoria, la Ley 19.123 y otras normas jurídicas conexas, han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En este sentido, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los



Foja: 1

derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones:

- a. Reparaciones mediante transferencias directas de dinero.
- b. Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas.
- c. Reparaciones simbólicas.

Asegura, que mediante estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de Justicia Transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

Continúa su explicación, señalando que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos. Destaca, que en la discusión legislativa de esta norma se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, algunos sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras, otros abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Afirma, que ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios.

Detalla, que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de:

- a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);
- b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y
- c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-
- d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.-

En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-



Foja: 1

Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, indica que una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que se valore para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Pues bien, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Señala que el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Afirma, que ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Hace presente, que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N°s 19.234, 19.992 y sus modificaciones.

Comenta, que la ley 19.992 y sus modificaciones, establecieron una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados" de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas.

Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Adicionalmente, hace presente que la demandante recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

Afirma, que el actor ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación mencionadas.

Refiere a continuación, que la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase.



Foja: 1

En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad, cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2020, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$6.543.883. Detalla, que este presupuesto se distribuye por Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992.- Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos equivalentes para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos.

Añade, que se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Igualmente, se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

A modo de ejemplo, un hijo o nieto del beneficiario, y siempre que el beneficiario original no hubiese hecho uso de él, ha podido postular a las becas Bicentenario,



Foja: 1

Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio o a las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que establece el reglamento de dichas becas.

Asimismo, se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

Adicionalmente, refiere que parte importante de la reparación por los daños morales causados a los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor - siempre discutible en sus virtudes compensatorias- sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

Argumenta, que la doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

Detalla, que en esta compleja tarea de entregar una compensación satisfactiva destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes:

- a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993;
- b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido-desaparecido.
- c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos.



Foja: 1

d) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos.

e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el “Memorial de los prisioneros de Pisagua” en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo “Para que nunca más” en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial “Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia” en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial “Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama” en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el “Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de Atacama” en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el “Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos” en la Plaza de Armas de Curacaví; el “Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista” en la sede de este partido; el “Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca” en esa ciudad; y el “Memorial Escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas” en el Cementerio Municipal de esa ciudad.

Todos ellos unidos a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

Insiste, que de todo lo expresado, puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, y han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos.

Asegura, que tanto las indemnizaciones demandadas como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no procediendo por ello, ser reparados nuevamente.

En este punto el fallo “Domic Bezic, Maja y otros con Fisco, de 2002, Rol 4753-2001, ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión



Foja: 1

indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues *“aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal”*.

En el mismo sentido, cita sentencia de la Excmá. Corte Suprema, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, Rol 4742-2012, que reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos.

Añade a continuación, que órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

Así, en el caso Almonacid se señaló expresamente que *“la Corte valora positivamente la política de reparación de violaciones a derechos humanos adelantada por el Estado (supra pár. 82.26 a 82.33), dentro de la cual la señora Gómez Olivares y sus hijos recibieron aproximadamente la cantidad de US\$ 98.000,00 (noventa y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), más beneficios educacionales correspondientes aproximadamente a US\$ 12.180,00 (doce mil ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América). Teniendo en cuenta todo lo anterior -prosigue la sentencia- el Tribunal considera no ordenar el pago de una compensación económica por concepto de daño inmaterial (...)”*.

En este mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades.

En el documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (Rule of Law Tools for Post-conflicts States) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial.

Así, indica que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro



Foja: 1

de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. De este modo, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados.

Añade que en la misma línea, es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización, lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.

Concluye señalando, que en atención a que las acciones interpuestas en autos están basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante.

En segundo lugar, deduce la excepción de prescripción extintiva, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas éstas, se rechace la demanda, en todas sus partes.

Expone, que conforme al relato efectuado por el actor, la detención ilegal y tortura que sufrió, tuvo lugar desde el 12 de septiembre de 1973, hasta el 14 de marzo de 1974.

Es del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la



Foja: 1

restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 05 de julio de 2023, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil.

En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil.

En subsidio de lo anterior y en caso que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de las acciones civiles opuestas en autos, transcurrió el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Sobre esta materia advierte, que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Argumenta, que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras.

Sobre esta materia, afirma, que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Expresa, que efectivamente, las normas del Título XLII Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado. Esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2°, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Detalla, que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1°, del Código Civil).



Foja: 1

La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

Expresa, que la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Destaca, que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Afirma, que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Expresa, que resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

Hace presente, que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Añade, que por otro lado, no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

Advierte, que el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que la demandante estuvo en situación de hacerlo.

Indica, que es de público conocimiento, que la Excelentísima. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, dictó con fecha 21 de enero de 2013, sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de



Foja: 1

Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

En dicha sentencia, el Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando:

1°) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva.

2°) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal.

3°) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto.

4°) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

Añade además, que las sentencias anteriores y posteriores al citado fallo no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia contundente en la materia, acogiendo las argumentaciones hechas valer por su parte, lo que solicita se tenga especialmente en consideración al momento de resolver la presente Litis, tal como ha resuelto el Pleno de nuestro Excmo. Tribunal, en sentencia de fecha 21 de enero de 2013 que acogió la aplicación de la institución de la prescripción en materias como la de autos.

Prosigue señalando, que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de la misma, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha



Foja: 1

de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Comenta, que sobre el particular debe considerarse, como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de una acción ajena a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

Finalmente, en relación con las alegaciones expuestas por la actora en cuanto que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, señala que se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de la acción civil derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Señala que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar-tal como lo ha reconocido la Excelentísima Corte Suprema- que en ninguno de sus artículos declara la Imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Detalla, que los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad



Foja: 1

de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

La Resolución N°3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada *“Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”*, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

La Convención Americana de Derechos Humanos, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria. En relación a esta Convención, destaca que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo, no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile.

Es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Afirma que este planteamiento, ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país.

Asegura, que la Excelentísima Corte Suprema ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1.133-06, caratulado “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007, que en sus considerandos



Foja: 1

vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas y lo mismo aconteció en la sentencia dictada por el mismo tribunal superior, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos ingreso N° 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007. Añade también otros fallos en el mismo sentido.

Insiste que, no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Con el mérito de lo expuesto, insiste que deberá rechazarse la demanda indemnizatoria por encontrarse prescrita la acción deducida.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, procede a formular las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido de \$200.000.000.

Con relación al daño moral, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales.

Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Expresa, que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante



Foja: 1

una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Comenta, que es en la perspectiva antes indicada, que hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida. Por otra parte, advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

En subsidio de las alegaciones precedentes, refiere que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos a través de los años por el actor de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral, advirtiendo que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Además, indica, que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Por último, hace presente también, que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en autos acoja las demandas y establezca esa obligación y además, desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Indica, que a la fecha de interposición de la demanda o de su notificación y mientras no exista sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna obligación de indemnizar ha sido establecida, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Advierte que lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.



Foja: 1

Explica, que el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha que precede a la determinación del monto por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, expone que el artículo 1.551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por consiguiente, en el hipotético caso de que se acojan las referidas acciones y se condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrían devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su parte incurra en mora.

Previa invocación de disposiciones legales y jurisprudencia que estima pertinentes, solicita tener por contestada la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

TERCERO: Respecto a la excepción de *“reparación satisfactiva o integral”*, comenta que no está de acuerdo con dicho razonamiento, ya que, en el mejor de los casos, los montos que otorgan las referidas leyes sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990. Sostiene, que en ningún caso dichas pensiones reparan íntegramente el dolor experimentado por la demandante en su calidad de víctima directa de violaciones graves a sus derechos humanos y fundamentales.

Hace presente, que nunca un tribunal de la República ha fijado el monto de la reparación que debería obtener, por lo que no sería entonces un crédito líquido y actualmente exigible. Argumenta, que es evidente que desde el punto de vista jurídico no cabe acoger la excepción alegada.

Destaca, que el Fisco reconoce por medio de sus alegaciones que se produjo un crimen de lesa humanidad y que ese crimen produjo un daño moral a la demandante. Comenta, que “los pagos” que realiza el Fisco de Chile, implican un acto real y un reconocimiento implícito y explícito de la responsabilidad que le cabe, extinguiendo de tal manera la prescripción de la acción que más tarde alega.



Foja: 1

Expresa, que la Ley N°19.123 que el demandado esgrime como justificación para decir que el daño moral ya está resarcido, en su artículo 2 establece que *“Le corresponderá especialmente a la Corporación (...) Promover la reparación del daño moral de las víctimas”*. Destaca, que la palabra promover no es sinónimo de reparar, y en el caso de la demandante de autos, no se ha reparado íntegramente el daño moral que padece hasta el día de hoy. Añade, que el sentimiento de injusticia y de no haber sido compensada, ni reparada, ni indemnizada, subsiste intacto e irreductible hasta el día de hoy.

Hace presente, que la propia Ley 19.123, no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24 (*“La pensión de reparación puede ser compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiere corresponder al respectivo beneficiario”*), entonces, con menor razón podría el intérprete de la ley descartar la procedencia de la pretensión indemnizatoria por el solo hecho de haber mediado el pago de una pensión como ocurre en este caso concreto. En otras palabras, al no establecer la ley en comento incompatibilidad alguna entre ser beneficiario de la pensión de reparación y demandar por daños en sede civil por el mismo asunto, es insostenible la excepción de reparación integral invocada por el Fisco de Chile.

Afirma, que así también lo han entendido los tribunales superiores de Justicia en forma reiterada. Comenta, que no cabe entonces que el demandado trate de decir que en base a las leyes precitadas, las víctimas de violaciones a los derechos humanos estarían impedidas de demandar.

Expresa, que comprueba lo anterior, lo sentenciado en la causa *“Valencia Oyarzo Eliecer con Fisco de Chile”*, en que se condenó al Fisco a pagar la suma de \$150.000.000 a víctimas sobrevivientes del centro de detención y tortura ubicado en la Isla Dawson (Rol Excm. Corte Suprema N° 1.092-2015). Además de todos los casos en que ha sido demandado el Fisco de Chile, por los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, en que el demandado ha utilizado y utiliza esta misma excepción de reparación integral, como por ejemplo en el de Carmelo Soria, cuyos familiares si obtuvieron una indemnización independiente de ser beneficiarios del Informe Rettig. Lo mismo ocurre con el caso del abogado Sr. Julio Cabezas, el caso de la familia de Tucapel Jiménez, a quienes el Consejo de Defensa del Estado indemnizó con una cuantiosa suma pese a recibir los familiares la misma pensión Rettig. Casos también como el de la familia del ex Canciller Orlando Letelier o el de la señora Otilia Vargas (madre de 5



Foja: 1

desaparecidos), incluso el acuerdo arribado con la familia del General Carlos Prats, vienen a confirmar que es perfectamente compatible una indemnización en conjunto con la reparación de los Informes Rettig y Valech. Señala que si así no lo entendiéramos, el Consejo de Defensa del Estado estaría haciendo discriminaciones que no se condicen con lo expresado en nuestra Constitución o al menos se estaría contradiciendo en sus aseveraciones.

Asegura, que así también lo ha entendido la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en forma reiterada.

Expone que el artículo 76 de La Constitución Política de La República, establece que: *“La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”*. Argumenta, que en virtud de este artículo, el razonamiento expuesto por el demandado no resulta concordante con la Carta Fundamental, ya que basarse en la Ley N° 19.123, y muy especialmente en la Ley N° 19.992 y sus modificaciones, para decir que el daño moral ya está reparado, llevaría necesariamente a la conclusión de que el Congreso de Chile estaría avocándose al conocimiento y resolución de una causa judicial pendiente, y ello es abiertamente inconstitucional.

Advierte, que si se aceptara la tesis Fiscal, el monto de la reparación que han recibido las víctimas estaría fijado de forma unilateral y absolutamente arbitraria por el responsable, es decir el Estado de Chile, y le estaría vedado a las víctimas discutirlo.

En cuanto a la prescripción, sostiene que le parece jurídicamente insostenible afirmar que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil. Expresa, que tal afirmación es errónea por cuanto trae aparejada la negación rotunda de la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional que, por lo demás, ya han sido aplicadas por nuestros tribunales superiores en materia de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo entre ellos, por cierto, a la Excelentísima Corte Suprema.

Cita, el caso “Caro con Fisco de Chile”, en que la Corte Suprema resolvió: *“Que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, el principio de la responsabilidad*



Foja: 1

del Estado, si bien se encuentra consagrado en el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República, no indica cuál es su naturaleza, de suerte que para determinarla debe necesariamente recurrirse a la ley, en este caso, el artículo 4º del D.F.L. 19.653, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Esta disposición previene, que el Estado es responsable por los daños que causaren los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que la hubiere ocasionado” (Cfr. EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA, 19.10.05, “Caro Silva con Fisco de Chile”, Rol N° 4004-2003, considerando N° 6).

Indica, que el demandado incurre en un error jurídico al sostener que este litigio se debe resolver haciendo uso de categorías propias del Derecho Privado. Hace presente que la argumentación invocada por la defensa fiscal resulta improcedente a la luz de la denominada doctrina de los actos propios así como a la buena fe que debe orientar las defensas de las partes, toda vez que se alega en autos la *“inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado”* basado en que *“el derecho común en materia de responsabilidad extracontractual, se encuentra contenido en nuestro Código Civil en el Título XXXV, denominado De los Delitos y Cuasidelitos, artículos 2314 y siguientes”*. Advierte, que esta última alegación, resulta incompatible y contraria a la línea de defensa que históricamente ha planteado el Consejo de Defensa del Estado, sosteniendo en latas argumentaciones los poderes exorbitantes de la Administración reclamando privilegios que se apartan de la noción clásica del Derecho Público, donde sí reconoce la existencia de normas especiales que regulan la actividad administrativa, abogando por la teoría de los poderes implícitos por la función de servicio público que desarrolla. Igualmente, dicha institución ha negado jurisdicción y competencia a los tribunales ordinarios para conocer de las acciones de los administrados que reclaman de sus actuaciones. Sin embargo ha requerido de esos mismos tribunales y en los mismos juicios, que resuelvan en su favor, en particular respecto a la excepción que interpone, como es el caso sublite.

Señala, que la acción no está prescrita por las siguientes razones:

-La acción constitucional, para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del estado no establece plazo de prescripción.

-El demandado no (re) conoce la pertinencia en este asunto de las reglas de responsabilidad contenidas en la “Convención Americana sobre Derechos



Foja: 1

Humanos”, pues insiste en sostener una interpretación antojadiza y/o reduccionista no solo de las leyes que componen el ordenamiento jurídico interno, sino que también del marco regulatorio internacional de los Derechos Humanos.

Menciona, que de acuerdo a la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” es un error ignorar el hecho que ésta ha regulado el deber de reparar el mal causado que pesa sobre todo Estado que ha violado los derechos fundamentales de sus habitantes. Comenta, que basta tener a la vista el artículo 63 de la citada Convención junto con la enorme cantidad de jurisprudencia que, desde hace varios años, viene dictando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la forma correcta de interpretar y aplicar dicho artículo.

Afirma, que en nuestro medio ya existen precedentes jurisprudenciales que refuerzan esta misma idea. Precisa, que la Corte de Apelaciones de Santiago ha sentenciado que *“cabe precisar que la fuente de la responsabilidad civil, tratándose de una violación a los derechos humanos, está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos. En efecto, de acuerdo a los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando ha habido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. A juicio de la Corte Interamericana, el artículo 63.1 de la Convención constituye una norma consuetudinaria que es, además, uno de los principios fundamentales del actual derecho de gentes tal como lo han reconocido esta Corte (...) y la jurisprudencia de otros tribunales (...)”* (Caso Aloeboetoe y otros de 1993).

Argumenta, que el sostener que el caso de autos está prescrito es erróneo toda vez que se construye sobre un supuesto teórico que afirma la desconexión total de las acciones civiles con las penales, esto es: que sería posible castigar a los responsables y al mismo tiempo dejar sin reparación a las víctimas.

Expone, que la prescripción extintiva constituye una sanción o pena civil toda vez que el titular de un derecho que no solicita al órgano jurisdiccional su reconocimiento en el tiempo que el legislador contempla, verá extinguirse su acción para exigir su cumplimiento. Advierte, que la evidente naturaleza sancionatoria del instituto de la prescripción extintiva impide que esta sea aplicada por analogía, con mayor razón cuando su aplicación analógica se contrapone a los principios que informan tanto el Derecho Público en general y el Administrativo en particular, así como - y muy especialmente - los que subyacen en el Derecho Internacional de los Derechos humanos. Asegura, que pretender integrar la



Foja: 1

ausencia de normativa que regule la prescripción extintiva en el caso sub lite mediante la aplicación analógica de las normas del Código Civil, considerándolo como derecho común y supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta exagerado y desproporcionado, en tanto niega la distinción entre Derecho Público y Derecho Privado, así como la particularidad de las relaciones jurídicas que cada uno de tales estatutos regula: El Derecho Privado regula las relaciones desde un plano de igualdad con plena autonomía de las personas para obligarse y cuyo fin es el bien particular en tanto su objeto es el intercambio de bienes. El Código Civil es supletorio al Derecho Privado, al que orienta. El Derecho Público, en cambio, regula la relación de los particulares frente al Estado cuyo fin es el bien común basado en los principios de juridicidad y supremacía constitucional. Agrega, que luego del advenimiento de la 2ª guerra mundial y la experiencia aciaga que significó el régimen nazi, surge fuertemente la necesidad de limitar el poder y arbitrariedad del Estado, modificando radicalmente la concepción de la soberanía estatal, limitando su ejercicio al respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana dando vida al complejo normativo de los Derechos Humanos. De este modo, la evolución de las ciencias jurídicas ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, lo cual el mismo Código Civil reconoce en su artículo 4º al estipular que las disposiciones particulares *“se aplicaran con preferencia a las de este Código”*.

Afirma, que en consecuencia, la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de los derechos humanos de las personas debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación armónica de las normas y principios del Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quedando proscrita la aplicación analógica de los artículos 2332, 2514 y 2515 del Código Civil, ya por su naturaleza ciertamente sancionatoria, ya por la contrariedad de los fines y postulados que informan al Derecho Privado y al Público, ya por la disparidad de las situaciones que se busca regular: mientras el Código Civil regula relaciones de tipo contractual vinculada a un negocio común o bien daños derivados de delitos o cuasidelitos civiles, aquí nos encontramos frente a delitos de la mayor gravedad que importan una afrenta hacia la comunidad internacional en su conjunto. Así, al no existir una similitud en las situaciones fácticas, no resulta viable la analogía que supone hechos de igual valor que implique iguales consecuencias jurídicas.

Sostiene, que los delitos de Lesa Humanidad no prescriben, tanto en su investigación, en su sanción y en su reparación.



Foja: 1

Expone, que existe un debate dogmático sobre la naturaleza de la responsabilidad del Estado y el estatuto jurídico aplicable. No obstante, argumenta, que cualquier estatuto que se aplique llevará a la misma conclusión: la existencia de la responsabilidad del estado, por hechos que causan daño y en que los particulares afectados no tienen obligación jurídica de soportar tales daños. En un Estado de Derecho real - y no aparente – el principio de la responsabilidad es de la esencia del mismo. Los daños causados por el Estado literalmente “se pagan”.

Añade, que el derecho citado por las partes no es vinculante para el jurisdiscente, ya que este será el que soberanamente aplique el derecho al caso concreto.

Respecto de la afirmación que realiza el demandado en relación a que la Corte Suprema ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, reconoce que ello es cierto, sin embargo hace presente que la más reciente jurisprudencia de la Excma. Corte ha variado el criterio otorgándole el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de Lesa Humanidad atentatorios contra los Derechos Humanos, concediendo así la correspondiente indemnización.

En relación al monto de lo demandado, advierte que una demanda indemnizatoria nos exige pretensiones concretas. Indica, que no hay dinero que supla el dolor experimentado por el demandante. Comenta, que en lo petitorio se señaló que se condene a la suma que el Tribunal disponga.

Respecto a los reajustes, reitera lo expuesto en el libelo. Añade, que una correcta aplicación del artículo 1557 en relación al artículo 1551 del Código Civil, normas aplicables supletoriamente al estatuto de responsabilidad extracontractual del Estado, determinaría que los reajustes e intereses aplican desde la fecha de interposición de la demanda.

Prevía invocación de disposiciones legales y jurisprudencia que estima pertinentes, solicita tener por evacuado el trámite de réplica, y dar traslado al de dúplica.

CUARTO: Que, evacuando la dúplica, el demandado reiteró la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación de la demanda de autos, las que da por expresamente reproducidas y conforme a ellas pido el rechazo de la demanda.

En relación con la excepción de reparación, reitera lo señalado al contestar, en cuanto a que el daño moral ya ha sido indemnizado. Insiste respecto al marco general de las reparaciones ya otorgadas, al esfuerzo que ha realizado el Estado



Foja: 1

de Chile para compensar el daño producido a las víctimas, y en especial, respecto a las reparaciones percibidas por el demandante, ya sea en forma de transferencias directas en dinero, mediante la asignación de nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante el conjunto de reparaciones simbólicas mencionadas en la contestación.

En relación con la prescripción de las acciones deducidas en este juicio, reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno”.

Detalla, que en dicho fallo se concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil. Afirmar, que en esta materia se aplica el artículo 2332 del Código Civil que dispone un plazo de cuatro años en la cual prescribe la acción por responsabilidad extracontractual en contra del Estado. Señala, que la aplicación de esta norma está regulada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción se aplican “a favor y en contra del Estado”.

Argumenta, que la Excma Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil.

En cuanto a las alegaciones vertidas por la parte demandante relativas al monto demandado e intereses y reajustes, da por reproducidos en forma expresa las alegaciones vertidas en la contestación de la demanda.

Previa invocación de jurisprudencia que estima pertinentes, solicita tener por evacuado el trámite de la dúplica.

QUINTO: Que, para acreditar sus dichos, la demandante acompañó al anexo de los folios 1 y 30, los siguientes documentos:

1.- Certificado de nacimiento de don Héctor Alfonso Vera Vera, emanado del Servicio de Registro Civil e Identificación.

2.- Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de 24 de marzo del año 2023, donde se certifica que don Héctor Alfonso Vera Vera se encuentra



Foja: 1

reconocido como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como "Comisión Valech I", además de la nómina adjunta a dicho certificado, que acredita la calidad de víctima reconocida del demandante, quien se encuentra individualizado en el número 26.044.

3.- Copia fidedigna de los antecedentes que reunió la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en el proceso de reconocimiento del demandante como víctima de prisión política y tortura del Estado, durante la dictadura civil militar.

4.- Excma. Corte Suprema. Causa Rol 18.179-2019. Sentencia de casación de 06 de diciembre de 2019, caratulado "Torres con Fisco".

5.- Excma. Corte Suprema. Causa Rol 18.179-2019. Sentencia de reemplazo de 06 de diciembre de 2019, caratulado "Torres con Fisco".

6.- Excma. Corte Suprema. Causa Rol 13.877-2019. Sentencia de casación de 24 de diciembre de 2021.

7.- Excma. Corte Suprema. Causa Rol 13.877-2019. Sentencia de reemplazo de 24 de diciembre de 2021.

8.- Copia de la Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, Rol de ingreso N° 8105-2018, de fecha 13 de junio de 2018.

9.- Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada con fecha 29 de noviembre de 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Órdenes Guerra y otros vs. Chile".

10.- Respuesta del Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentada en el caso "Órdenes Guerra y otros vs Chile".

11.- Informe de daños elaborado por la psicóloga Jeannette Rosentreter Zamora.

12.- Certificado médico suscrito por el Dr. Carlos Cañenas Olivares, de fecha 31 de agosto de 2023.

A folio 41, el demandante solicitó oficios, recibándose respuestas de las siguientes instituciones:

1.- Fundación Documentación y Archivo de la ex Vicaría de la Solidaridad, domiciliada en calle Las Trinitarias N° 7.101, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana; a folio 65.



Foja: 1

2.- Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ILAS, domiciliado en calle Portugal N° 623, oficina 9, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana; a folio 48.

3.- Programa de Asistencia Integral de Salud, PRAIS, del Ministerio de Salud, con domicilio en calle Mac Iver N° 541, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana; a folio 66.

5.- Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC, domiciliada en calle Manuel Rodríguez N° 33, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana; a folio 52, 53 y 54.

Además, al folio 61 y 69 rindió prueba testimonial en los siguientes términos:

En primer lugar, comparece doña Margarita Cleofas del Carmen Pastene Valladares, quien respecto al hecho de si por una actuación del Estado a través de sus agentes se ocasionaron perjuicios al demandante de autos, afirma que aquello le consta, porque estaba en el mismo lugar de los hechos, esto es, Antofagasta en la Universidad del Norte, hoy Universidad Católica del Norte.

Detalla, que el profesor Vera era vicerrector de la universidad, y el día 12 de septiembre después del golpe de estado, fue detenido en su casa y privado de libertad.

Añade, que no puede dar fe, pero sabe que fue torturado en la base Aérea Cerro Moreno, donde también sufrió simulacros de fusilamiento.

Sostiene, que su detención no tenía ningún fundamento, ya que el profesor Vera no cometió ningún delito.

Advierte, que el demandante se vio obligado a abandonar el país, siendo exiliado en Bélgica.

Precisa, que estos son hechos que dan cuenta de la vulneración de los derechos de un ciudadano chileno, cuya vida fue fracturada junto a la de su familia por causas que generó la dictadura militar.

En cuanto a los perjuicios, detalla que son de diversos tipos. En primer lugar, se refiere al emocional psicológico, por ser detenido, torturado, y obligado a salir al exilio, lo que significó un sufrimiento inconmensurable, no solo para él, sino que también para su familia. Expresa, que se rompió la cotidianidad de una persona



Foja: 1

profesional con un cargo importante, por el solo hecho de tener pensamientos políticos; lo que afectó su desarrollo personal y profesional.

Agrega, que tampoco fue fácil reinsertarse en la sociedad chilena, laboral, anímica y políticamente, ya que existían prejuicios en la sociedad respecto de quienes retornaban; limitándose los espacios en la reinserción laboral.

Advierte, que desde el punto de vista político, y debido a las causas que supuestamente el demandante tenía pendiente en Chile, al volver no recuperó sus derechos ciudadanos y no pudo votar en algunas elecciones.

En segundo lugar, comparece Rubén Alexis Espejo Sandoval, quien respecto a la naturaleza y monto de los perjuicios causados, expresa que en el demandante se percibe una enorme dificultad para poder enfrentar, conversar y exponer lo que vivió él y su familia en la década de los 70 y 80. En particular por el exilio que sufrieron como familia.

Menciona, que Héctor perdió años de trabajo, ofertas laborales, posibilidades reales de establecer líneas de investigación, con motivo de lo que sufrió con su familia a partir del golpe de estado, y advierte, que si bien ha sido uno de los maestros del área más destacados, vio afectado su desempeño profesional y sus capacidades emocionales, personales y psicológicas con motivo de las circunstancias que vivió.

Añade, que producto de los 50 años del golpe de estado, y los despliegues militares por estados de excepción o del estallido social, el demandante sufrió dificultades para andar en la calle y desenvolverse profesionalmente.

Comenta, que el demandante perdió 10 años de vida profesional, dedicándose ya fuera de Chile a diversos oficios, desde limpiar pescados en las caletas hasta la venta de frutas en el mercado. Precisa, que para una persona con el desarrollo intelectual y académico del demandante, la merma que sufrió con la familia fue importante.

Señala, que la hipersensibilidad del demandante se manifiesta en términos sociales y laborales, en no tocar temas y restarse de asumir trabajos vinculados a estas situaciones. En términos físicos observó voz temblorosa, ojos vidriosos y mucho nerviosismo.



Foja: 1

Respecto a problemas familiares, indica que el demandante tiene tres hijos que a muy avanzada edad pudieron vincularse con Chile, y con su familia en el país, por lo que existe un vínculo debilitado con sus abuelos y sus tíos.

Menciona, que durante la contingencia social, el demandante guardó aislamiento, se mantuvo en su hogar y solo salió a la clínica, atendida la presencia de militares en la calle, sufriendo ataques de pánico, sensación de desvanecimiento y miedo.

SEXTO: Que, la parte demandada solicitó oficio al Instituto de Previsión Social (IPS) a fin de que informe sobre todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido el demandante Héctor Alfonso Vera Vera Run N° 5.240.211-5, especialmente en relación con las leyes 19.123, 19.234, 19.992, 20.874, y demás pertinentes; oficio que fue acompañado al folio 17.

SÉPTIMO: Que, el caso de autos, versa sobre la responsabilidad indemnizatoria que le cabría al Estado de Chile por la detención y tortura del demandante, que comenzó con fecha 12 de septiembre de 1973; por lo que resulta necesario determinar la existencia de dicha responsabilidad.

OCTAVO: Que, en atención a los documentos acompañados a folio 1 por el demandante, especialmente el Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de 24 de marzo de 2023, donde se certifica que don Héctor Alfonso Vera Vera se encuentra reconocido como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, además de la nómina adjunta a dicho certificado, que acredita la calidad de víctima reconocida; la copia fidedigna de los antecedentes que tuvo a la vista la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, "Comisión Valech", para reconocer al demandante como víctima de prisión política y tortura del Estado, durante la dictadura cívico-militar; permiten presumir que el demandante fue víctima de los hechos narrados en la demanda.

Que, en el mismo sentido el oficio N°4792-15856, indica que el demandante, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura (Ley Valech), recibe beneficios por esas vulneraciones.

Cabe destacar, que la parte demandada no ha controvertido estas circunstancias, sino que ha centrado la controversia en primer lugar, en si la demandante ya ha sido reparada en los perjuicios alegados o si la indemnización pretendida resulta incompatible con las reparaciones concedidas por las leyes 19.123 y 19.992, con sus modificaciones y otras normas pertinentes; y en segundo lugar, si la acción



Foja: 1

indemnizatoria deducida por la actora se encuentra prescrita extintivamente a la fecha de haber sido notificada al demandado.

NOVENO: Que, de los párrafos reseñados en el considerando anterior, podemos concluir como hechos no controvertidos en autos: a) la calidad de víctima de tortura de don Héctor Alfonso Vera Vera; y, b) que en la calidad antes señalada, aparece en el Informe emitido por la Comisión Valech I.

En consecuencia, se tendrá presente que la responsabilidad del Estado no ha sido discutida por las partes de este juicio, es más, la demandada alega expresamente que el demandante, ha sido reparado satisfactoriamente por el Estado por los delitos cometidos en su contra durante la época de la dictadura.

Por este motivo, se tendrá por acreditado que la detención y tortura, ocurrió en un contexto de violencia propia de aquella época, la que era practicada por agentes del Estado o civiles que actuaban por órdenes o bajo el amparo del régimen imperante, mediante prácticas graves y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos con el único objetivo de exterminar y amedrentar -ya sea física y/o psicológicamente- a personas opositoras al régimen militar, como en el caso de marras.

Así lo expuesto, aparece clara la responsabilidad civil del Estado, que fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política de la República, en cuanto a que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, y en su inciso final, al señalar que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; considerando además lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por la demandada, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por las Leyes N° 19.992 y 20.784 al demandante.

En cuanto a la excepción de prescripción.



Foja: 1

DÉCIMO: Que, en primer lugar y respecto a las alegaciones efectuadas por la parte demandada en cuanto a que la acción civil se encontraría prescrita, ya sea porque los hechos ocurrieron desde el 12 de septiembre de 1973; o por la fecha de retorno a la democracia, por lo que han transcurrido los plazos para ejercer la acción civil; se deben tener presente una serie de elementos facticos y jurídicos.

En primer lugar, y como ya se ha señalado reiteradamente en esta sentencia, nos encontramos frente a crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establecen los respectivos convenios e instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, toda vez que estos hechos ocurrieron en un contexto de excepción, período en que se violaron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o con simples fines de amedrentamiento de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste.

Considerando la conclusión del párrafo precedente, corresponde determinar si estos son prescriptibles o no, teniendo presente que partiremos enfocándonos en la acción penal. Así, uno de los elementos más característicos de los crímenes de lesa humanidad es justamente su imprescriptibilidad, pues así se establece, por ejemplo, en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de fecha 26 de noviembre de 1968, específicamente en su artículo I letra b), el que señala que *“Los crímenes siguientes son imprescriptibles, (...) b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz...”* y en el artículo 3° del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda de 1994. Si bien la Convención no se encuentra ratificada por nuestro país, las normas y especialmente los principios contenidos en el instrumento internacional, sin lugar a dudas se elevan a la categoría de ius cogens, la que sí tiene plena aplicación en nuestro derecho interno. Así también lo ha establecido la jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema en fallos recientes, como son en causa Rol N° 1424-2013, denominado “Episodio Tejas Verdes” de fecha uno de abril de 2014, en sus considerandos sexto al décimo quinto; la causa Rol N° 4300-2014, denominado “Episodio Nilda Peña Solari” de fecha cuatro de septiembre de 2014, en sus considerandos octavo al décimo tercero; y la causa Rol N° 21.177-2014, denominado “Episodio Villa Grimaldi”, caratulados “Ramón Martínez González”, de fecha diez de noviembre de 2014, en sus considerandos décimo cuarto al décimo octavo, solo por citar algunos.



Foja: 1

En consecuencia, habiéndose determinado que la acción penal en materia de crímenes de lesa humanidad resulta imprescriptible, es necesario establecer si en el caso de marras la acción civil que deriva de estos hechos punibles también resulta imprescriptibles o si por el contrario deben aplicarse las reglas generales de prescripción del Código Civil.

Es así, que teniendo claro que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, resultaría incoherente entender que la presente acción indemnizatoria, si esté sujeta a normas de prescripción, siendo contrario ello a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito. Así lo ha resuelto la Corte Suprema, en reiterados fallos, como por ejemplo en la sentencia de reemplazo en causa Rol. N° 4300-2014, de fecha cuatro de septiembre de 2014, denominado “Episodio Nilda Peña Solari” (considerando Segundo), de igual forma en causa Rol. N° 1424-2013, de fecha uno de abril de 2014, denominado como “Episodio Tejas Verdes” (considerando Undécimo, segundo párrafo), en la cual se establece claramente que la acción civil es imprescriptible. A mayor abundamiento señala el citado fallo:

“... Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama...”

Misma conclusión ha llegado la Corte de Apelaciones de Santiago, por ejemplo en sentencia causa Rol. N° 1476-2014, de fecha cuatro de noviembre de 2014 (considerando Décimo Cuarto), la que señala en lo relativo a la acción civil que al igual que la acción penal, ésta *“... es imprescriptible porque se sustenta en una conducta ilícita de agentes del Estado... calificándose el delito de lesa humanidad”*.

Debe tenerse presente además, que no estamos frente a una acción de indemnización de perjuicios común, que derive de relaciones privadas contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que nos



Foja: 1

encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el ius cogens, propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

De acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, por cuanto ha ratificado la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico.

Señala también la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Chile y vigente, que dispone en su artículo 63.1 que *“cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”*, lo que se traduce en una obligación constitucional para el Estado chileno, de indemnizar por la perpetración de crímenes de lesa humanidad, incorporada a nuestro derecho interno por mandato del artículo 5° de la carta política, sin que sea posible estimar, como pretende la demandada, que dicha instrucción indemnizatoria está dirigida exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no a nuestros tribunales de justicia, aserto que importaría desdeñar preceptos constitucionales.

Es así, que los artículos 2332 y 2515 del Código Civil, si bien también se aplican a favor del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, no resultan aplicables en esta materia, por ser abiertamente contrarias a las normas internacionales de Derechos Humanos ya mencionadas, que establecen un carácter unitario de las acciones penales y civiles emanados de delitos de lesa humanidad.

Así las cosas, esta sentenciadora y teniendo presente las normas ya referidas y por los fundamentos antes expuestos, rechazará tanto la alegación principal como la subsidiaria en cuanto a declarar cualquiera de las prescripciones de la acción



Foja: 1

civil que da origen a estos autos, declarando expresamente para los efectos de la presente sentencia, que la acción civil emanada de un acción penal de tipo imprescriptible por crímenes de lesa humanidad, también es imprescriptible.

En cuanto a la excepción de reparación satisfactiva o de pago.

UNDÉCIMO: Que, la parte demandada opuso también la excepción de ser improcedente la indemnización por la existencia de reparación satisfactiva obtenida por el demandante.

Al respecto, cabe tener presente que la Ley N°19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala. Dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios, a través de los cuales el Estado chileno ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas. El propio artículo 4° de la citada ley dispone que *“en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere haber a personas individuales”*, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.

Asimismo, la citada ley en parte alguna estableció una incompatibilidad entre los beneficios que otorga e indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial, no existiendo motivo alguno ni siendo facultad de esta sentenciadora para presumir que dicho estatuto se dictó con el ánimo de indemnizar todo daño moral sufrido por las víctimas de derechos humanos.

A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, los beneficios establecidos en la Ley N° 19.123 y N° 19.992 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral.



Foja: 1

Este mismo criterio es el que ha establecido la Corte Suprema en diversos fallos, indicando incluso que las fuentes que dan origen a la indemnización por daño moral y los beneficios establecidos por la Ley N° 19.123 provienen de fuentes distintas. Es así, que la indemnización encuentra su fuente en el derecho internacional por la demanda que se hace al Estado en la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos así como la interpretación de las disposiciones de derecho internacional que conforman el *ius cogens* que tiene plena aplicación en virtud del artículo 5° de la Constitución Política del Estado, a diferencia de la norma legal interna citada. Indica que el espíritu de la Ley N° 19.123 al establecer beneficios relacionados con los compromisos adquiridos por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación no pueden confundirse con aquellas que emanan del Derecho Internacional que imponen la obligación de reparación íntegra. Refiere que la citada ley no establece la incompatibilidad reclamada por el Fisco, como tampoco importa una renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia. Por último agrega que los beneficios establecidos en el cuerpo legal no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral sufrido por las víctimas (Sentencia Corte Suprema, Rol N° 1424-2013, “Episodio Tejas Verdes”, considerando décimo tercero).

DUODÉCIMO: Que, a fin de zanjar la discusión anterior, el hecho que el demandante sea beneficiario de un sistema de previsión de salud especial, de gestos simbólicos u otras medidas análogas, no es en caso alguno incompatible con la obtención de indemnizaciones pecuniarias por los graves hechos cometidos de los cuales han sido víctimas directa o indirectamente.

Cabe hacer presente además, y como es de público conocimiento, que muchos de los “gestos simbólicos” como señala la demandada en su escrito de contestación han sido realizados, organizados y financiados por particulares y organizaciones no gubernamentales, en los cuales el Estado ha participado de manera tangencial o derechamente no lo ha hecho.

Es por lo anteriormente expuesto que se rechazara la excepción alegada de reparación satisfactiva, ya obtenidas por el demandante.

En cuanto al fondo.

DÉCIMO TERCERO: Que, entrando al fondo de la acción deducida, y teniendo establecida la responsabilidad civil del Estado, según se explicó en los considerandos octavo y noveno de esta sentencia, habiéndose además declarado



Foja: 1

la compatibilidad entre la indemnización de perjuicios por daño moral y las prestaciones que otorga la Ley N°19.123 y N°19.992 y las reparaciones simbólicas, según el considerando undécimo, y declarada la imprescriptibilidad de la acción de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el considerando décimo, corresponde analizar la procedencia de indemnizar al actor, por el daño moral con ocasión de su detención y torturas, cometida por agentes del Estado, y en la afirmativa, fijar la cuantía de la indemnización, refiriéndose de paso a las excepciones relativas al monto y naturaleza de la indemnización e improcedencia del pago de reajustes en la forma solicitada por la demandante, opuesta por el demandado.

Debe tenerse presente que el daño moral, es definido como el detrimento, angustia, dolor sufrimiento, aflicción o menoscabo o trastorno psicológico, afección espiritual o lesión de un interés personalísimo, causado a la espiritualidad de la víctima como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito o de la infracción a un derecho subjetivo, no definible por parámetros objetivos, que puede afectar a la víctima o a un tercero, pudiendo consistir en daño moral puro o bien de índole pecuniario cuando indirectamente afecta la capacidad productiva del perjudicado. Así también, en reiterada jurisprudencia, la Corte Suprema ha definido el daño moral como la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra.

DÉCIMO CUARTO: Que, lo descrito por la demandante en su libelo, en concordancia con que dichas circunstancias no fueron objetadas ni desacreditadas por la demandada, y el hecho que el demandante se encuentra incorporado como víctima de prisión y torturas por la Comisión Valech I, habiéndose efectuado por este organismo un proceso investigativo y formado convicción de la calidad de víctimas de las personas incorporadas en dicho listado, ya bastan para tener por acreditado el daño moral sufrido por el demandante, presumiéndose con claridad las circunstancias de la detención, su tortura y exilio.

Además, de la prueba testimonial de folios 61 y 69, se desprende que el demandante presenta daños psicológicos producto de la detención, tortura y exilio. Cabe resaltar que la declaración de dos o más testigos contestes en el hecho y circunstancias esenciales que den razón de sus dichos podrá constituir plena prueba, cuando no haya sido desvirtuada por otra prueba en contrario, en virtud del artículo 384 N°2 del Código de Procedimiento Civil. Por otra parte, la



Foja: 1

declaración de testigos de oídas podrá estimarse como base para una presunción judicial, en conformidad al artículo 383 del mismo cuerpo legal.

Cabe destacar, que el documento individualizado como *“Copia fidedigna de los antecedentes que tuvo a la vista la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, “Comisión Valech”*, menciona que fue privado de libertad desde el 12 de septiembre de 1973 al 14 de marzo de 1974; sufriendo golpizas y simulacros de fusilamientos. Además, el mismo documento da cuenta que el demandante fue exiliado del país.

Por último, cabe mencionar que el informe de daños elaborado por la psicóloga Jeannette Rosentreter Zamora; y el certificado médico suscrito por el Dr. Carlos Cárdenas Olivares, de fecha 31 de agosto de 2023; ambos acompañados al anexo de folio 30; no fueron reconocidos en juicio, por lo que se omitirá pronunciamiento al respecto.

Que, la totalidad de la prueba analizada en este considerando, permite a esta sentenciadora presumir de forma grave y precisa, en los términos señalados en los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil, y 1712 del Código Civil, la veracidad de los hechos señalados en la demanda, constituyendo plena prueba por la gravedad y precisión de la presunción.

Adicional a todo lo analizado en los párrafos precedentes, se debe tener presente también, que respecto de la materia que nos convoca, este daño moral es el único que se encuentra establecido por ley. Así, la Ley N° 19.123 reconoce clara e innegablemente la existencia de daño moral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a quienes se consideran causantes de los beneficios ahí establecidos, haciéndose extensivo a los familiares. Este mismo criterio es el que ha establecido la Corte Suprema al indicar que los citados cuerpos legales de manera explícita reconocen la existencia de los daños a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y sus familiares.

En consecuencia, por todo lo expresado, se encuentra ampliamente acreditado en autos la existencia del daño moral ocasionado al demandante, en circunstancias de su ataque y detención, cometido por agentes del Estado en tiempos de dictadura, ilícito ya reproducido en considerados previos de esta sentencia.

DÉCIMO QUINTO: Que, la demandada ha alegado que la suma sobre la que se pretende obtener una indemnización, resulta excesiva, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en estas



Foja: 1

materias y los montos promedios fijados por los tribunales de justicia. Además, subsidiariamente alegó que la regulación del daño moral, debe considerar todos los beneficios consistentes en la reparación integral y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Que el oficio ORD DSGT N° 4792-15856 agregado a folio 17, del Instituto de Previsión Social, emitido con fecha 24 de agosto de 2023, hace presente que don Héctor Alfonso Vera Vera, recibe una pensión de reparación como víctima en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados de la Comisión Valech, conforme a la Ley N° 19.992, Ley 19.234, bono por Ley N°19.992, bono por Ley N°20.134; que fue beneficiario del Aporte Único de Reparación de la Ley N° 20.874, y de aguinaldos.

Que, aun cuando pudiéramos estimar que la pensión vitalicia recibida viene a suplir parte del sufrimiento padecido por el demandante, el otorgamiento de dicha pensión se fundamenta en una norma de carácter general, estableciendo pensiones reparatorias para un universo de víctimas, no verificando la situación particular de cada individuo y por tanto, no podría estimarse que suple de forma razonable y suficiente la totalidad del daño.

En conclusión, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

Ahora, respecto al Aporte Único de Reparación recibido por la demandada en virtud a la Ley N° 20.874, establece en su artículo 1 inciso 3° que *“Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura”*, por lo que habrá de considerarse el monto recibido por el demandante en este concepto, al momento de determinar las indemnizaciones pertinentes.

En consecuencia, los beneficios establecidos en la Ley N° 19.992 y 20.874 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral, correspondiendo a pagos de distinta naturaleza que cumplen con un objetivo diverso y que además emanan de una fuente distinta.

Así, habiendo establecido que no existe una incompatibilidad entre los beneficios otorgados voluntariamente por el Estado y las acciones judiciales que puedan hacer valer en Tribunales, la alegación de la demandada de tener en



Foja: 1

consideración pagos efectuados a terceros, solo será considerada parcialmente, en atención a lo analizado en los párrafos anteriores.

Por último y en lo referente a tener en consideración los montos establecidos por otros tribunales, cabe recordar que rige para todos los tribunales del país el principio de independencia. Que, el hecho de citar jurisprudencia en un fallo tiene por objeto simplemente reforzar los fundamentos que se plantean en cada sentencia individualmente, no operando en nuestro país la doctrina del stare decisis (ya sea horizontal o vertical). Tanto es así, que lo más cercano a ello puede encontrarse únicamente en el procedimiento laboral, en el que el legislador creó de forma extraordinaria el recurso de unificación de jurisprudencia, dando cuenta que ello constituye una excepción a la generalidad de nuestros procedimientos.

DÉCIMO SEXTO: Que, determinada la existencia del daño moral sufrido por el actor, es necesario fijar su cuantía en dinero. Cabe señalar que la apreciación pecuniaria del daño moral, por la naturaleza del mismo, es compleja. El principio de reparación integral tiene limitaciones, no debiendo en aras a ser fiel a sus lineamientos, otorgar una indemnización excesiva o desmedida tornándose caprichosa o arbitraria y no cumpla con la exigencia de reparar en forma equitativa el daño sufrido.

Para esta materia, esta sentenciadora considerará prudencialmente el mérito de los antecedentes aportados al proceso, en especial la Copia de antecedentes de carpeta del demandante, presentados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, acompañado al folio 1; el que da cuenta de que el demandante fue víctima de detención por más de 6 meses, siendo torturado y exiliado. Cabe destacar, que de la declaración de don Rubén Alexis Espejo Sandoval, se desprende que el demandante padece síntomas de tipo psiquiátrico.

Que, el análisis anterior, es realizado con el objeto de fijar un monto que se corresponda a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a la víctima de autos.

Que, asimismo, este tribunal comprende plenamente que las sumas de dinero que se concedan al actor en nada destierran el dolor y aflicción permanente sufrido por esta, debido a las conductas ilícitas ya narradas, momento en que desnaturalizándose y trastornándose los fines del Estado, agentes del Estado quienes por disposición moral y legal estaban encargados de la cautela y seguridad de los ciudadanos, atentaron en los términos más crueles en contra de ellos.



Foja: 1

Que, en cuanto a los oficios solicitados por el demandante, todos referidos a las consecuencias de salud física y mental sobre las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en tiempos de Dictadura Militar, las que concuerdan en que eventos de detención, prisión política y tortura provoca un profundo sufrimiento psíquico, caracterizado por una intensa angustia, sensación de pérdida permanente en el tiempo, frustración, dolor en extremo aniquilante, desgarrador y autodestructivo, síntomas depresivos, desinterés en el mundo externo, familiar y laboral, pérdida de motivación, sentimientos de desamparo, vulnerabilidad y miedo de carácter persistente, ver a la estructuras estatales como organismos amenazantes, manifestaciones somáticas como dolores corporales crónicos, insomnio, lumbago, cefaleas, entre otros. Si bien estos informes son de carácter genérico, vienen a reforzar el daño moral legalmente existente que las víctimas directas de violaciones a los Derechos Humanos han padecido.

En consecuencia, encontrándose acreditada la participación penal de los agentes del Estado que intervinieron en la detención del demandante, el Estado debe reparar el perjuicio ocasionado, cuya determinación concierne prudencialmente a este tribunal, toda vez que resulta imposible medir con exactitud la intensidad del sufrimiento provocado.

En atención a lo expuesto, se fijará la indemnización de perjuicios por daño moral que deberá pagar el Estado en favor del demandante don Héctor Alfonso Vera Vera, en la suma de \$50.000.000.

Que, del monto fijado como indemnización, deberá restarse el Aporte Único de Reparación, recibido por el demandante, en virtud de la Ley N° 20.874 y conforme lo dispone el inciso 3° del artículo 1 de la citada norma.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, la sumas ordenadas, se pagarán reajustadas de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha en que quede firme y ejecutoriada la sentencia y hasta el pago efectivo de la indemnización, por lo que a este respecto, se acogerá la excepción deducida por la demandada. Respecto a los intereses legales, estos se devengarán desde la fecha en que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia y hasta la fecha de su pago efectivo, rechazándose la excepción opuesta respecto a su improcedencia.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en cuanto al resto de documentos, individualizados más no analizados en particular, en nada alteran lo resuelto por este tribunal, por lo que se omitirá pronunciamiento al respecto.



Foja: 1

En cuanto a la jurisprudencia acompañada, cabe resaltar que el artículo 3 del Código Civil dispone: *“Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio.*

Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”.

DÉCIMO NOVENO: Que, no habiendo resultado totalmente vencida, no se condenará a la demandada al pago de las costas.

Y, VISTO ADEMÁS lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes y 38° de la Constitución Política de la República; artículos 2332, 2515 y 2497 del Código Civil Chileno; artículo 4° de la Ley N° 19.653 de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 19.123, 19.980, 19.992 y 20.874; artículo 3 común de los Convenios de Ginebra; artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 27° y siguientes de la Convención de Viena; artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y artículos 139, 144, 160, 170, 342, 346, 358, 384, 426 y 428 del Código de Procedimiento Civil, **SE RESUELVE:**

I.- Que se RECHAZA la excepción de reparación satisfactiva o pago a la actora.

II.-. Que se RECHAZA la excepción principal de prescripción de la acción civil de 4 años en virtud de lo dispuesto por el artículo 2332 del Código Civil.

III.- Que se RECHAZA la excepción subsidiaria de prescripción de la acción civil de 5 años en virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del Código Civil.

IV.- Que se ACOGE PARCIALMENTE la alegación subsidiaria de regulación que el daño moral debe considerar los beneficios consistentes en la reparación integral, solo en cuanto descontar de la indemnización, lo recibido por el Aporte Único de Reparación establecido en la Ley 20.874, rechazándose el resto de la alegación.

V.- Que SE ACOGE la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral interpuesta a fojas 1, en contra del demandado Fisco de Chile, y SE CONDENA a éste a pagar en favor de la demandante don Héctor Alfonso Vera Vera, Rut 5.240.211-5, la suma de \$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos) descontando lo percibido por concepto de Aporte Único de Reparación, como se señaló en el numeral anterior.



C-9460-2023

Foja: 1

VI.- Que la suma que se ordena indemnizar, se pagará reajustada de acuerdo a la variación del IPC desde la fecha en que quede firme esta sentencia y el pago efectivo de la indemnización y devengará intereses legales desde la misma fecha y hasta su pago efectivo.

VII. Que se ACOGE la alegación de improcedencia de pago de reajustes en la forma solicitada.

VIII.- Que NO SE CONDENA en costas a la demandada, por no haber sido totalmente vencida.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.-

C-9460-2023.

DICTADA POR DOÑA GABRIELA SILVA HERRERA, JUEZ TITULAR.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, cinco de Marzo de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GFTQXMEDTXD

